REVISTA DE HISTORIA MODERNA

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE N° 19 - 2001

OLIGARQUÍAS Y MUNICIPIO EN LA ESPAÑA DE LOS AUSTRIAS

Portada:
«El Justicia y los cuatro Jurados de la ciudad de Alicante, vestidos
con los ropajes propios de su cargo»

Fotocomposición

Impresión: INGRA Impresores

ISSN: 0212-5862

Depósito Legal: A-81-1982

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.

**Estos créditos pertenecen a la edición
impresa de la obra.**

Edición electrónica:

Revista de Historia Moderna
Anales de la Universidad de Alicante nº 19 - 2001

Oligarquías y municipio en la España de los Austrias

Magín Arroyas Serrano

**Un marco legal señorial para una oligarquía
municipal: el caso de Segorbe en el retorno
a la Casa Ducal**

Índice

Portada

Créditos

Magín Arroyas Serrano

Un marco legal señorial para una oligarquía municipal: el caso de Segorbe en el retorno a la Casa Ducal

5

Resumen

5

Abstract.

5

Del secresto real al nuevo señorío

7

El control del poder institucional de la ciudad.

13

Crisis de las ordinaciones y reforzamiento del control señorial

27

Notas

43

Un marco legal señorial para una oligarquía municipal: el caso de Segorbe en el retorno a la Casa Ducal

Resumen

Dentro del proceso de devolución de la ciudad de Segorbe en 1619 al dominio jurisdiccional de su señor el duque de Segorbe y Cardona, fueron aprobadas unas ordinaciones y estatutos que regulaban los oficios municipales de la urbe cabeza del ducado. La norma jurídica, que es parte integrante de todo un conjunto de acuerdos con los que se pactó el retorno, fijaba los criterios de control institucional por el señor y favorecía la configuración de una clientela de adictos lo que, pese a su vigencia durante todo el siglo XVII, propició el que ya fuera puesta en entredicho a los pocos años de su promulgación.

Abstract

In the process of devolution of the city of Segorbe in 1619 to the jurisdictional rule of its lord the duke of Segorbe y Cardona, new bylaws and statutes were passed which regulated the local trades in

the town head of the dukedom. The juridic law, which is an integral part of a wholw set of agreements with which the return was agreed, sed the criteria of institutinal control by the lord and favoured the composition of a clientele of supporters what, althoug it was still in effect for the whole of the 17th. century, brought about that it was already questioned after a few years of its enactment.

En 1619 el duque don Enrique de Aragón aprobaba para la ciudad de Segorbe las *Ordinaciones y Estatutos* que regulaban sus oficiales municipales, tanto en lo referente a su relación de cargos como en las condiciones de elección y salarios a percibir. La importancia de la norma radicaba en el hecho de que ésta se enmarcaba dentro de un proceso que suponía la conclusión a varias décadas de disputa por la jurisdicción de la ciudad, de ahí el interés que tiene el documento para analizar las reglas de convivencia entre el señor y sus vasallos a la hora de fijar quien administra el municipio como poder local.

Pero las ordinaciones y estatutos de 1619 no pueden entenderse fuera de todo el conjunto de situaciones y acuerdos, pactos entre partes, que hicieron posible que una ciudad valenciana importante y cabeza de obispado, *renunciase* a su posibilidad de ser realengo para continuar siendo señorío nobiliario.

Quienes acabaron propiciando y aceptando esta solución sólo podían aspirar a convertirse en personajes principales de su propia comunidad, en consecuencia élite municipal, y para ello era necesario un ordenamiento legal que al configurar el poder municipal favoreciese el cumplimiento de este deseo; de ahí la necesidad de conseguir la norma que auspiciara la pretensión, al tiempo que el señor a la vez que contentaba a sus fieles se reservaba unas potestades para agradecer a aquellos que poco a poco acabarían siendo su clientela, sus fieles vasallos. Ambos intereses se plasmaron en el ordenamiento municipal solicitado por el Consejo local y decretado por el duque, una norma que duraría no sin dificultades durante toda la centuria del siglo XVII.

Del secresto real al nuevo señorío

El rey Alfonso el Magnánimo concedía en 1435 la ciudad de Segorbe a su hermano el Infante don Enrique [\(nota 1\)](#). Según se manifestaba en el privilegio de concesión, era tan sólo una donación temporal hasta tanto el infante recuperase las posesiones que le habían sido quitadas en Castilla por el monarca castellano Juan II, y después de algunos problemas ésta se hacía efectiva en 1437 a través de letras ejecutorias dadas por el rey para que el infante tomase posesión [\(nota 2\)](#).

Lo que en un principio se planteaba como una cuestión de temporalidad pronto vio diluirse el concepto y se afianzó con el otorgamiento del título de duque de Segorbe [\(nota 3\)](#), posteriores ratificaciones de la concesión original [\(nota 4\)](#), o la constitución del mayorazgo sobre el Estado de Segorbe [\(nota 5\)](#). Pero la ciudad nunca aceptó de buen grado su enajenación de la corona.

La muerte del duque don Francisco de Aragón en 1575 sin testamento que nombrase heredero, «ab in testato», generó pleitos entre sus hermanas para que se fijase la forma de reparto de la herencia. Pero sobre todo, el fallecimiento y la pugna sucesoria, provocó la reacción de los acreedores del ducado que exigieron el cobro de las deudas, lo que obligaría a la intervención real decretando que el señorío fuese secres-tado y puesto bajo administración de funcionarios reales. La ciudad aprovecharía el momento y, con el apoyo del Procurador patrimonial del rey, planteó pleito de incorporación a la Corona [\(nota 6\)](#). Se iniciaba así una situación que se vería prolongada cerca de cinco décadas hasta su solución aparentemente definitiva.

En 1581 una sentencia fijaba la graduación de acreedores [\(nota 7\)](#). En consecuencia a la misma, podía plantearse la recuperación del señorío por la duquesa doña Juana, here-

dera del mayorazgo y título, pero la prosecución del pleito de la ciudad de Segorbe no favorece la solución en este sentido, toda vez que no se trataba de un pleito entre señores nobiliarios sino la posibilidad de que el territorio y sus vasallos quedasen como patrimonio real. En las cortes de Monzón de 1585, la duquesa consiguió que el monarca aceptase la devolución del patrimonio y se procediese a ordenar el levantamiento del secresto que facilitase la toma de posesión por doña Juana, pero tal decisión no afectó a la ciudad de Segorbe, que quedaba fuera de los territorios que podía recuperar la duquesa de Cardona ([nota 8](#)). En 1596 nuevamente doña Juana pretendió recuperar la ciudad y ducado, pero el pleito sin resolverse y en instancia del Consejo de Aragón, seguía siendo un obstáculo difícil de superar ([nota 9](#)).

La expulsión de los moriscos en 1609 y la consiguiente repoblación de los territorios que estos habitaban, sobre todo debido a la concesión de sus propiedades abandonadas que hizo la corona en favor de los dueños del señorío, movió otra vez al titular del ducado a aprovechar la coyuntura para plantear nuevamente la recuperación de la ciudad de Segorbe. En 1611 el duque don Enrique de Aragón solicitaba al monarca le permitiese tomar posesión de Segorbe, tal y como en su día se le concedió a su abuela el que pudiese tomar posesión

del resto de los señoríos vinculados a la casa de Segorbe. La voluntad real en este momento no fue de oposición frontal, sino el que se garantizase económicamente la situación con fianzas por parte del peticionario ante el caso de sentencia favorable a la incorporación a la Corona ([nota 10](#)).

La petición no resolvió nada. La ciudad se movilizó llevando al Consejo Supremo de Aragón un nuevo conflicto contra «*el duque de Cardona*» sobre un censal ([nota 11](#)), mientras que los titulares del mayorazgo resolvían otra vez problemas familiares sobre el patrimonio, sobre todo con doña Magdalena de Aragón princesa de Melito con la que en 1590 se había llegado a una concordia en sus derechos a la herencia, pero que ahora volvía a pleitear ([nota 12](#)). En 1615 el duque ordenaba a sus agentes, visto que no se adelantaba en la cuestión de la posesión, prosiguiesen todos los pleitos para recuperar las propiedades ([nota 13](#)).

Así se llegaba a 1619 donde, ante una nueva petición de don Enrique de Aragón, un dictamen del Consejo de Aragón si bien no se definía por la devolución total, lo que hubiese significado sentencia al pleito pendiente, tampoco se oponía a que el rey permitiese la toma de posesión de Segorbe por el duque siempre y cuando se continuase el pleito hasta su sentencia definitiva y, por otra parte, el duque no pudiera presio-

nar a las personas e instituciones que habían promovido y continuaban el pleito, quienes debían quedar bajo la protección y amparo de la corona. Felipe III aceptó la sugerencia del Consejo y el 5 de marzo de 1619 firmaba una cédula real que levantaba el secresto de la ciudad y ducado, mandando a sus autoridades diesen la posesión a don Enrique de Aragón, si bien fijaba que éste había de concordar con la ciudad las condiciones de la toma de posesión ([nota 14](#)).

La ciudad de Segorbe vivió en aquellos días momentos de gran tensión y enfrentamientos, sobre todo durante las sesiones del Consejo General que se reunía con gran asistencia de vecinos para tratar el asunto. Los bandos se organizaron entre quienes pretendían negarse a dar la posesión y los que aceptaban el pasar a ser señorío del duque; estos últimos, obsequiados generosamente por los agentes ducales ([nota 15](#)), dominaron finalmente la asamblea y se acordó en ella que se diese posesión de la ciudad al duque, para lo que designaron a los miembros del Consejo particular como representación de la misma con la que se debía llegar al acuerdo de las condiciones.

El 17 de marzo de dicho año don Luis de Córdova y Aragón, hermano y procurador del duque don Enrique, firmaba escritura pública de aceptación de las condiciones presentadas

por la ciudad, todas ellas de carácter económico relacionado con pagos de censales o percepción de ingresos para la hacienda municipal, y finalmente en sesión del dicho Consejo particular celebrada el día siguiente, 18 de marzo, el notario Francisco Bartolomé Simanques elevaba a escritura pública la aceptación en reunión conciliar de los pactos y acuerdos a los que se había llegado con el procurador del duque [\(nota 16\)](#). A continuación, el representante del duque tomaba la posesión de la ciudad de Segorbe siguiendo el ritual feudal acostumbrado en tales actos [\(nota 17\)](#).

A la vista de cómo se desarrollaban los acontecimientos, el duque procedía a nombrar Baile el 5 del siguiente mes de abril designando a Joaquin de Larralde y Bastán uno de sus partidarios más significado entre las gentes de Segorbe [\(nota 18\)](#), al tiempo que proseguían las negociaciones llegándose el 2 de junio a la aceptación de unos capítulos para la firma de una concordia entre la ciudad y el duque, concordia que suponía entre otras cosas la renuncia de la ciudad a continuar con el pleito de incorporación a la corona, todo ello inclusive después de haberse oído hasta el parecer de teólogos sobre la cuestión [\(nota 19\)](#).

El control del poder institucional de la ciudad

La buena situación en que se resolvían los temas, y ese nuevo ambiente de entendimiento facilitado por la existencia de una bando favorable entre los ciudadanos de Segorbe, propició el que se entrase en el aspecto del gobierno de la ciudad. En la reunión del Consejo General de 16 de marzo de 1619, al tiempo que se reservaba la institución local el nombramiento de síndicos que la representasen en el pleito y el poner imposiciones para sufragarlo, sin que ello pudiera impedirlo el duque, exigían que este no se entrometiese en el control de la insaculación, sistema por el cual se regían para la elección de oficios, y que estaba en manos de algunos oficiales:

«Item que para que esto tenga siguridad y firmeza, se obligue su Excelencia de consentir en la insaculación que está hecha, y en la que huviere de hazer la haian de hazer el Justicia, Jurados [y] Síndico de dicha ciudad.» (nota 20)

No obstante la petición, ésta no fue considerada por el duque y en ningún momento de los actos y acuerdos de la toma de posesión hay referencia alguna al tema del gobierno municipal.

Este silencio, que podía interpretarse como aceptación implícita del sistema vigente en la elección de oficiales no fue tal, pues eliminado el motivo para preservar esa autonomía y poder reservado a oficiales de la ciudad propio de la mayoría de las ciudades y villas de realengo, desaparecida esta última condición por la renuncia al pleito, no podía perpetuarse manteniéndose una situación que impidiese el control del señor sobre una institución, el poder local, que fuera de su órbita repitiese en cualquier momento nuevas aventuras de pleitos de incorporación a la corona o enfrentamientos con su señor jurisdiccional.

Desde ésta perspectiva se entiende el procedimiento que se inicia para concluir con la introducción de un nuevo marco legal, regulador de las instituciones y oficios que componen el poder local, así como la forma de designación de sus integrantes.

El 13 de septiembre de 1619 se reúne el Consejo Particular, y entre otros aspectos deliberan que ante «*La grande confusión que hay en las ordinaciones viejas respectantes a las vituallas y bien de los particulares de dicha ciudad, las quales es justo se corrijan y si fueren menester se hagan de nuevo, para lo qual es bien se dé razón dello al Consejo General para que nombre quatro o seys personas para que puedan advertir lo que conviniere respectante a dichas ordi-*

naciones, y para dicho efecto de tratar y resolver dichas dos cosas (nota 21), sería bien se juntase el Consejo General precediendo para ello licencia del Excelentísimo señor duque Señor nuestro.» (nota 22)

Ese mismo día se solicita al duque permiso para convocar dicho Consejo General y éste lo concede, por lo que al siguiente día se juntaba la asamblea y en ella se formulaba la cuestión:

«E primeramente fue propuesto por los dichos Jurados la grande confusión que hay en las ordinaciones antiguas que hoy tiene la ciudad, respectantes a las vituallas y bien común y de los particulares de dicha ciudad, las quales importa mucho reduzirlas a número conveniente y orden para que se guarden y observen, para lo qual ha parecido lo sería también que, pues se trata de interesse de los particulares se diese razón al Consejo General para que este elija en su nombre quatro o seys personas, o las que le pareciere de todos estados, para que vean, trasteen y adviertan ser en provecho de dicha ciudad y sus particulares respectante a las ordinaciones que se hizieren. Y todos quitados seys votos, vista la dicha determinación fueron de parecer

que es muy justo lo propuesto por dichos Jurados, y que desde luego se nombren doze personas para lo dicho.

En execución de lo qual, los dichos Jurados con aprobación del consejo nombraron para dichas ordinaciones las personas siguientes: Francisco Capilla, Miguel Marco, Jayme Rocafort, Vicente Escrig mayor, Pedro Sancliment, Pedro Martínez, Antón de Veo, Justino Machuca, Joan Nofre Estornell, Francisco Andrés, Jayme Benafer y Joan de Guizalica, vezinos desta ciudad de Segorbe, dándoles todo el poder necessario para con asistencia del Justicia, Jurados y Síndico trasteasen dichas ordinaciones, con tal que acabadas antes de decretallas se comunicasen con dicho Consejo General.»

(nota 23)

Lo que se planteaba como una adecuación de las ordinaciones en materia de abastecimiento de la ciudad, lo relacionado con el trigo, y que estas antes de ser decretadas se aprobasen por el Consejo General, derivó en una nueva base legal de ordenación de todo el poder municipal y una tramitación que se llevaría exclusivamente por el Consejo Particular.

El día 16 del mismo mes se reunía el Consejo Particular. De sus veintiún miembros diez habían sido partícipes de la comi-

sión de revisión de las ordinaciones antiguas y redactora de la nueva propuesta presentada ahora por los Jurados para su debate, el cual se prolongaría al día siguiente y una vez redactado era presentado para su aprobación al duque el 19 de septiembre en suplica dirigida por el Síndico de la ciudad:

«Francisco Sanz, Síndico de la Ciudad de Segorbe, con orden y poder expreso que tengo para lo infrascrito, digo, que el Consejo Particular desta ciudad, a quien por costumbre inmemorial ha tocado siempre y toca en el día de hoy, precediendo licencia de los señores Infantes y Duques de Segorbe, hazer las Ordinaciones siguientes que convienen para el bien público, y en particular las que han tenido respecto a las elecciones y nombramientos de oficios y cargos de la presente ciudad, precediendo orden y mandato de vuestra Excellencia, has trasteado y hecho las Ordinaciones respectantes a los dichos oficios, que están comprendidas en tres títulos. El primero de elecciones de Oficiales. El segundo de Oficiales, y calidades dellos. Y el tercero de salarios de Oficiales, las quales a parte desta presento. Y como para firmeza de dichos Estatutos y Ordinaciones sea justo queden estas decretadas, vistas, añadidas y corregidas, y confirmadas por vues-

tra Excellencia, para que con mayor firmeza se guarden y executen: Por tanto suplico a vuestra Excellencia sea de su servicio mandarlas ver, añadir, corregir y quitar, decretándolas en la forma que fuere justo; que en ello quedará la ciudad de nuevo obligada y reconocida a las muchas mercedes que de mano de vuestra Excellencia recibe.» (nota 24)

El duque recibía la petición y comunicaba que proveería lo que fuere justo, pero la rapidez de la tramitación hace pensar que el texto definitivo se pactó en la jornada del día anterior entre representantes de la ciudad y del señor, quien lo devolvía aprobado sin corrección alguna y decretado el siguiente día 20 en que el Consejo aceptaba los términos del decreto:

«Nos don Enrrique de Aragón, duque de Segorbe y Cardona, marqués de Comares, etc. Vista la suplicación que en el día de diez y nueve de este mes de setiembre, se me ha presentado por parte de Francisco Sanz, Síndico desta mi ciudad de Segorbe; con la qual me ha suplicado decretasse, añadiesse, corrigiesse y aprobase las Ordinaciones hechas por el Consejo Particular desta mi ciudad, respectantes a la elección de los Oficiales, calidades y salarios dellos, y lo demás que fuere necessario y conviniente acerca dello. Por

quanto lo contenido en ellas me ha parecido que es justo, y que lo devo y puedo decretar, conforme se contiene en cada uno de dichos Estatutos y capítulos, conforme al pie dellos lo tengo decretado. Por tanto sin perjuyzio de qualesquier derechos, y facultades y libertades que me compitieren, admitiendo la suplicación del dicho Síndico, e inclinado a sus ruegos, apruevo las dichas Ordinaciones en la forma y modo que al pie de cada una dellas se hallará continuado y rubricado de mi mano; mandando en consecuencia de lo dicho se cumplan dichas Ordinaciones en la forma que están escritas y decretadas, y no en otra alguna, continuando en ello en quanto menester sea la possession que de dichas cosas por mí y por mis passados tengo. Y ansí mesmo a los Jurados, y demás Oficiales y Consejeros de dicha ciudad que hoy son, y por tiempo fueren, no contravengan a ninguna de dichas cosas, si de nuestra gracia tienen por cara y dessean no incurrir en las penas en dichos Estatutos contenidas, y mas de quinientos florines de oro de Aragón, aplicadores a nuestra Cámara. Datis en nuestra Ciudad de Segorbe a veynte días del mes de setiembre mil seyscientos y diez y nueve años. El duque de Segorbe y de Cardona.

Por mandado del Duque mí señor, Francisco Luys su criado. Leydo todo lo qual, el dicho Consejo Particular todos unánimes y conformes, dixeron que agradecían y estimavan mucho la merced que su Excellencia les havía hecho en decretar y aprobar las dichas Ordinaciones en dicha forma; y que determinaban se guardassen y executassen dichas Ordinaciones como ley inviolable; y assí en nombre de dicha ciudad lo juraron guardar y observar, y cumplir en todo y por todo, so las penas contenidas en el mandato y provisión de su Excellencia, el qual quieren obedecer y guardar en todo y por todo. De todo lo qual me mandaron los dichos Jurados y Consejo Particular a mí, Sebastián Pérez notario y Escrivano de la Sala, nombrado por su excellencia, les recibiesse auto público para haver memoria en lo venidero, y que el presente auto se registre en el libro de Consejos de la presente Sala y de dicha ciudad de Segorbe, como a Estatutos y Ordinaciones, por las quales se ha de regir la presente ciudad.» (nota 25)

El texto de las ordinaciones, según las conocemos por la publicación impresa aludida, se componen de un cuerpo normativo agrupado en tres títulos (*de elecciones de oficiales; de oficiales y calidades dellos, y de los salarios*), y que a su vez

incluyen un total de veintinueve artículos o capítulos el título primero, dieciséis el segundo y veintiuno el tercero.

Por lo que respecta a los Oficiales de la ciudad de Segorbe, las nuevas ordinaciones fijan los que son –en realidad todo parece indicar que se mantiene la estructura existente–, destacándose al hablar de ellos el texto que se incluye de la fórmula de juramento que han de realizar al tomar posesión en los casos de los Jurados, Mayordomo o Almotacén y el Justicia.

De la estructura institucional, si tenemos en cuenta su composición, se pueden considerar oficios mayores los que integran el llamado Consejo Particular, compuesto por el Justicia, los Jurados, Síndico, Mayordomo, Racional, Clavario, Obrero y doce Consejeros. Además de estos, tienen condición de oficiales, que podemos denominar oficios menores, los Procuradores de Miserales y del Hospital, los Guardianes de la Huerta, el Cambrero y el Comprador de trigo, los Guardianes del Monte, los Cequeros y el Tablajero de penas. Nada se dice del Escribano, pues al ser este un oficio enajenado su nombramiento correspondía al titular del privilegio y no era oficial municipal.

A la hora de elegir los oficiales, el sistema regulado en las ordenaciones fija tres modelos. El primero, en el que se resuelve el nombramiento final por el duque o su representante, obliga en los casos de Jurados, Consejeros, Mayordomo, Justicia, Racional, Clavario y Obrero. Dos son las fórmulas ordenadas: una simple, consistente en que los Jurados y Consejo proponen al duque tres nombres y éste elige uno de ellos, o si no le satisfacen los propuestos designa otra persona, y que será usada para el Racional, en su elección cada tres años, el Clavario y el Obrero; la segunda, un poco más protocolaria sólo en las formas pues finalmente el duque o su representante es quien decide el titular de oficio, consiste en que por los Jurados se confecciona una lista con un número de integrantes no superior a doce ni inferior a nueve, lista que se remite al señor a través de una embajada o comisión, quien la acepta o modifica según su criterio devolviéndola al consejo y, después de un sorteo con redolines introducidos en una vasija de agua y extraídos por un niño, los redolines que sean necesarios son llevados ante el duque o su representante, quien elegirá de entre ellos la persona o personas que ocupen los oficios graduándolos en el caso de ser más de una, siendo electos de esta forma los tres Jurados, el Mayordomo y el Justicia.

Un segundo sistema es el de aquellos oficios que son regidos por los oficiales cesantes. Se incluyen aquí el Síndico, que lo será quien el año anterior fue Jurado Mayor si lo acepta el duque, y en caso contrario éste puede nombrar libremente otra persona, y algunos Consejeros como los Jurados y Síndico anterior si no tienen otro cargo, completándose el número de doce consejeros con una lista que proponen al duque los Jurados electos y este acepta.

Por último, el tercer sistema es el de oficios designados por los propios oficiales. Este grupo es electo y concordado por los Jurados salientes y entrantes en los casos de los Procuradores de Miserables y del Hospital; propuestos por los Jurados salientes y aprobados por el Consejo serán los cuatro Guardianes de la Huerta; a propuesta de los Jurados y con el voto favorable del Consejo serán designados el Cambrero y el Comprador de trigo, los tres Guardianes del Monte y el Tablajero de las penas. Finalmente, los nombramientos de Cequeros se realizan a propuesta de los Jurados requiriendo en unos casos aprobación del Consejo (acequias de Beber, Nueva y de La Loma) y en otros que tengan la condición de terratenientes o dueños de propiedad en la zona de riego (acequias de Amara, Artel y Fuente de Juan Alvarez), siendo el proponente en cada uno de los dos grupos el

Jurado primero, segundo y tercero en el orden que hemos citado las acequias.

A la vista, aunque sea en la manera resumida que hemos descrito los oficiales y su forma de elección, queda claro el control que el duque ejerce sobre los oficiales de la ciudad, bien directamente a través de su designación o de la que realizan los Jurados y el Consejo, designados previamente por él, así como llegado el caso la potestad de excluirlos cuando no sean de su agrado que también recoge el texto de las ordinaciones.

Otro aspecto a destacar, además de condiciones específicas como la profesión de notario que ha de tener el Procurador de Misericordias, o los recursos económicos propios para, en su caso, hacer frente a una mala gestión en el Procurador del Hospital, el Cambrero y el Comprador de trigo, la detallada regulación de las funciones de estos dos últimos oficios que, no se olvide, fue la excusa original para la redacción de las nuevas ordinaciones, es la acepción de Consejo como órgano colegiado que queda reducida a su concepto de Consejo Particular como el consejo por antonomasia en detrimento del Consejo General, institución ésta que en los últimos tiempos había tenido un gran protagonismo en la ciudad de Segorbe, aunque ciertamente ésta reducción de los Consejos a órganos más reducidos era una tendencia que se iba gene-

realizando en los municipios valencianos de la época, inclusive en los que se integraban en el realengo.

El título segundo marca las incompatibilidades para ejercer oficios: estas lo son por cuanto es necesario esperar a que pase un tiempo al cesar en un oficio para ejercer otro; tener las cuentas liquidadas en su caso; parentescos próximos entre padre e hijo, hermanos, cuñados, etc.; los que tuvieren arrendamientos de la ciudad o fueren deudores a la misma; tampoco podrán ejercer quienes no sean vecinos o naturales de la ciudad o del reino, en este caso con ciertas condiciones; quedan excluidos los menores de veinticinco años; los que no sepan leer y escribir, excepto quienes hasta el momento de decretarse las nuevas ordinaciones han sido oficiales de la ciudad, no puedan ser electos para oficio de Justicia, Jurados, Mayordomo, Racional, Síndico, Clavario y Cambrero. Finalmente, quedan excluidos los escribanos del Obispo, Cabildo y de la Sala o municipal, así como los sirvientes asalariados del Cabildo y canónigos.

Son, exceptuando las referencias al estamento e instituciones eclesiásticas por su condición de ciudad episcopal, normas genéricas en la mayoría de los municipios valencianos, pero el título será aprovechado para regular dos aspectos singulares como son el control de las actuaciones del Síndico

para salir como tal de la ciudad, bien el ordinario y el extraordinario si lo hubiere fijándoles el salario diario, y sobre todo definiendo el nuevo concepto de Consejo General, asamblea que no podrá realizarse sin licencia expresa del duque, y que queda integrada por el Consejo Particular más treinta y seis personas, doce nombradas por cada Jurado, de todos los estados y profesiones, con lo que desaparece la asamblea abierta a la participación de todos los que tengan condición de vecinos, quienes ahora sólo podrán asistir como espectadores pues los Consejos Generales lo serán siempre con *«las puertas abiertas»*.

En el título tercero se ordenan los salarios de cada oficio, así como la forma y momento de su pago, quedando fuera de la lista el Justicia e introduciéndose al Escribano de la Sala, el Verguero de la ciudad que además será Carcelero y el *«que tuviere cuenta con el Relox»*. Los Jurados, que recibían la cantidad más abultada con cien libras, venían obligados a hacerse las gramallas nuevas y, en caso contrario, sólo cobrarían la mitad.

Como se puede ver, lo dispuesto en el texto de las ordenaciones, que debían ser leídas públicamente por el Escribano todos los años después de que los Consejeros prestasen juramento, facilitaba plenamente el que fuesen del agrado del

duque y que este las decretase para su cumplimiento. No obstante, si bien es comprensible la satisfacción del duque, resulta curioso que este texto fuese presentado por las autoridades municipales, cosa que sólo se comprende si pensamos que sus promotores y aceptantes constituyesen el *bando ducal* y, consecuentemente, la élite que se vería recompensada con el acceso y ejercicio de los oficios. Lo cierto es que la ciudad a continuación de la promulgación del nuevo texto normativo realizaría las elecciones conforme a lo dispuesto en el mismo [\(nota 26\)](#).

Crisis de las ordinaciones y reforzamiento del control señorial

Las buenas relaciones entre la ciudad y el duque seguirían dando ejemplos de actuaciones satisfactorias para ambas partes. El primero de octubre de 1619 Segorbe le requería al duque, quien lo aceptaba con la expedición de un auto notarial, la confirmación de la concordia a la que habían llegado ambas partes, lo que propiciaría el que se informase de ello al Consejo Supremo de Aragón y este, por Decreto de fecha 26 del mismo mes, daba su consentimiento a los acuerdos de los consejos particular y general de 13 y 14 de septiembre respectivamente [\(nota 27\)](#).

En los meses siguientes el duque daba muestras de que todo le era propicio y en marzo de 1620 ordenaba a su administrador se hicieran los trámites para cumplir en la carga que había aceptado en la concordia del pago de censales de la ciudad (nota 28). El propio monarca le escribía al duque mostrándole su satisfacción por haber desistido Segorbe en el pleito (nota 29). En 1623, un decreto del duque modificaba los salarios de los oficiales de la ciudad incrementando sus retribuciones (nota 30).

Pero la situación de buenas relaciones entre la ciudad y el duque se truncaría en 1626 llegado el momento de renovar a los Jurados. Todo parece indicar que el motivo fue la decisión ducal de modificar la lista de los propuestos y la no aceptación por los oficiales locales de los consignados por la parte señorial. Ello daría origen a un nuevo momento de enfrentamientos y crisis, que parecían retraer las situaciones a los tiempos anteriores a la concordia de 1619 y la aceptación del fin de la disputa sobre reversión de la ciudad a la corona.

El primero de junio de dicho año, reunido el Consejo Particular, los Jurados avalados con el dictamen o parecer realizado por el doctor Vicente Planes, asesor de la ciudad, se rebelan contra la forma de elección de oficiales que figura en las ordinaciones vigentes: *«fue dicho y propuesto que*

dicho Consejo sea juntado para hazer elección de Jurados, ..., y que assí cada uno diga su parecer» (nota 31). El Consejo, con sólo un voto en contra, decidió realizar la elección de oficiales conforme a las costumbres y usos anteriores a las ordinationes de 1619.

Pocos días después, el 22 de junio, Joan Domingo Reyner síndico y procurador de Segorbe presentaba ante la Real Audiencia de Valencia una petición en la que manifiesta que en su día el Consejo Particular de la ciudad hizo ciertas ordinationes «*respectants a les elections de offitials de dita ciutat y al govern de aquella*», sin autorización del Consejo General y además contradiciendo inclusive lo acordado en una supuesta reunión de éste órgano, ordinationes que iban en contra de derechos, privilegios, usos y buenas costumbres además de «*moltes letres reals de sa Magestat y privilegis emanats de molts e differents serenissims reys de Aragó*». Concluía su escrito manifestando en que, si bien la norma era nula y sin valor de pleno derechos, no obstante «*suplica sien declarades nulles dites pretesses ordinations cancellant y anullant aquelles taliter que delatero no puguen traure en consequencia contra dita ciutat ni puguen aprofitar al dit duch*» (nota 32).

El escrito del Síndico de la ciudad alude que en la Real Audiencia se llevaban otros pleitos entre ésta y el duque, pleitos en realidad que también tenían que ver con la norma impugnada pues se trataba de la cuestión del permiso para reunir el Consejo General solicitado a la Audiencia y a lo que se oponía el duque, o la impugnación de la elección de Jurados y otros oficiales realizada dicho año sin aplicarse las ordenaciones del duque. Por otra parte, el hecho de aludir el escrito del representante de la ciudad a un inexistente consejo respondía al intento de no reconocer la reunión en la que la ciudad renunciaba a plantear los pleitos directamente ante la Real Audiencia, y se sometía al criterio de unos jueces árbitros, lo que no había hecho en este asunto.

La posición de la ciudad se aclaraba en el escrito redactado por su abogado Planes y presentado a la Real Audiencia el 21 de agosto, en el que negaba validez a todo lo realizado por la parte ducal e insinuaba inclusive que no tenía ningún efecto la concordia de 1619, pues el duque no había cumplido con sus compromisos como se trataba de demostrar en otros procesos [\(nota 33\)](#).

En una larga carta remitida al duque por su procurador en estos pleitos ante la Real Audiencia, Damián Fabra nos deja

constancia de la crispación que se había adueñado nuevamente de la situación:

«Y porque tanbién me ha mandado mi Señora que le enbie copia de los procedimientos que fueren haziendo los de Segorbe, enbio a vuestra Excelencia las petiçiones y escripturas siguientes:

Primeramente remito una petición larga que presentan los de Segorbe en el negoçio de la rescisión de las ordenaciones, y dentro va ordenada la satisfacción en la cual solamente se dize que en virtud de la carta real de 19 de julio ha de parar esta causa, y no se ha de tratar de la hasta que su Majestad mande otra cosa.

Item remito la petición en que hacen contradicción los de Segorbe a la carta real de 19 de julio 1626 y dentro va la réplica o contradicción hecha por mí a dicha petición.

Ítem remito otra petición bien desvergonçada en que pretenden los de Segorbe que, en virtud de la carta real de 5 de março 1619 antes de la possessión y de las concordias, en la qual su Magestad les reçibió debajo de su protección y amparo para proseguir el petitorio, que ahora les ha de valer aquella carta, y que vuestra Excelencia no ha de tener jurisdicción en los que tratan

los negocios contra vuestra Excelencia, que ha querido intentar este letradillo con esta trampa por le desmoronando a vuestra Excelencia su jurisdicción y sus derechos, que prometo a vuestra Excelencia que assí por esta desberguença y atrevimiento como por el que tiene de nombrar a vuestra Excelencia duque de Cardona, y en otras partes el duque don Enrrique y en otras el duque sólo, he andado algunos días procurando encontrarme con él para matalle a palos, y ha querido su ventura que yo estuviesse unos días con poca salud, y que me digese un santo religiosso que Dios lo havía querido porque no sucediesse mayor daño a mi casa, en fin pienso que ha sido ventura de judío que no se si le durará si anda en estas desberguenças y ruines modos. Perdóneme vuestra Excelencia que harto me voy a la mano, pues se atreve tanto y inquieta y destruye a los vasallos de vuestra Excelencia y se sale con ello, en fin va la petición y dentro la satisfacción que por ahora ha pareçido hazer» (nota 34).

Mientras los temas se trataban en la Audiencia se llegaba a las fechas de elección del Justicia, solicitando el procurador del duque que se realizase conforme lo dispuesto en las ordinationes que la ciudad cuestionaba (nota 35). La ciudad, por

su parte, pugnaba por conseguir convocar el Consejo General en base a la licencia que solicitaba a la Real Audiencia para realizar el mismo, pero ésta prudentemente no accedió a realizar tal acto de autorización que, de hecho, hubiese significado desautorizar la posición ducal, comunicando a las autoridades de Segorbe que se reuniesen en base al permiso dado por el representante señorial (nota 36). Finalmente la Real Audiencia se desentendía del conflicto y dictaba sentencia por la que se consideraba instancia no competente, con lo que daba la razón a lo manifestado por la parte ducal, y el tema se trasladaba al Consejo Supremo de Aragón pues Segorbe acudió a la institución en procedimiento de súplica (nota 37).

Entre tanto se dilucidaba la situación y por el Consejo era resuelta la cuestión, el duque seguía manteniendo su posición de señor jurisdiccional y la vigencia de las ordenaciones. En las instrucciones que se entregaron a don Pedro de Castellví y don Martín Valterra, a quienes nombró gobernadores de su Estado de Segorbe en 1627 y 1628 respectivamente, les hacía constar un mandato expreso sobre la cuestión:

«Iten a de tener un treslado de las ordinaçiones que tiene la çidad de Segorve para su gobierno decreta-

das por mí, las quales hará que se guarden ynbiolablemente sin dispensar ni alterar cossa alguna» (nota 38).

La posición de la casa ducal en el pleito ante el Consejo era elaborada por el doctor Luis de Casanate. Este, después de manifestar la sorpresa de que se protestase la validez de algo que se venía observando desde su introducción hacía siete años, expone que la cuestión no es si son nulas o no las ordina-
ciones pues la sentencia de la Real Audiencia pide se resuelva sobre la validez del acuerdo de someterse a jueces árbitros en las discrepancias, por lo que no debe entrarse en el planteamiento de la ciudad de declarar nulas las ordinaciones, toda vez que *«sería contra todas las reglas que se determinasse sobre las nulidades, sin determinar primero el artículo perjudicial, de quien ha de conocer dellas»*, al tiempo que debe confirmarse la sentencia de Valencia como justa pues *«como se ha dicho, por la concordia hecha de común consentimiento, aprovada y mandada guardar por su Magestad y Consejo Supremo, se dispuso la obligación de nombrar árbitros»*, por lo que *«aun quando en razón de concordia no valiera, vale en razón de confirmación, y se deve observar. Porque no se juzga en este caso como concordia de las partes, sino como ley inviolable del Superior que la manda guardar»* (nota 39).

El alegato en su argumentación dejaba bien a las claras que no dar la razón al duque sería ir contra decisiones del monarca y del propio Consejo, que ahora debe resolver el litigio, es decir, contra sus propios actos. El Consejo de Aragón dictaba sentencia en septiembre de 1628, haciendo saber a las autoridades de Segorbe que se mantenía la vigencia del acuerdo entre partes para que *«los pleitos que se ofreçieren contra el señorío yntentados por el Consejo general y particular della se ayan de seguir ante Jueçes Árbítrros»* (nota 40).

La vía o camino a seguir a la que era condenada la ciudad en la práctica significaba la victoria del duque, y éste entendiéndolo así lanzaba la primera muestra o señal de la nueva situación con un decreto, que revocando el de 1623 de aumento de los salarios de los oficiales municipales, retornaba los mismos a las cantidades fijadas en las ordinaciones de 1619 (nota 41).

Pero lejos de quedar resuelta definitivamente la problemática, se pasó a una convivencia difícil que daba signos puntuales de que se había roto el clima que hizo posible la promulgación y aceptación inicial de las ordinaciones. El duque era consciente de que, pese a ser prebendados, los miembros de la élite municipal de Segorbe se le podían rebelar en cualquier momento no aceptando la situación.

En 1631, después de una relativa calma, se volvía a cuestionar ante el Consejo Supremo de Aragón temas relacionados con censales y la ciudad. El duque presentaba conflicto en dicha institución contra la ciudad tanto en ese año, como en 1632. En 1634 era, relacionado con materia similar, la ciudad contra el duque ([nota 42](#)).

Ya en 1646 se iniciaba un enfrentamiento de mayores consecuencias, pues el duque designaba a un representante suyo para que como juez realizase un juicio de residencia a la ciudad y ésta se opuso a ser inspeccionada. Finalmente la sentencia del consiguiente conflicto fue favorable al duque estableciendo el derecho que tenía para realizar tales actos.

La década de los años cincuenta fue sin embargo la más conflictiva. En 1650 se producían diferencias entre ambos poderes en lo relativo al control del peso y mercado de la ciudad ([nota 43](#)), pero sería en 1652 cuando el nombramiento del Escribano de la Sala generase la situación más tensa. El duque notificaba a las autoridades de la ciudad la designación de nuevo Escribano de la Sala y ordenaba que lo recibiesen como tal. Estas se opusieron, aduciendo que no era natural de la misma, y que se contravenía lo dispuesto en las ordinaciones. Curiosamente, en este caso la ciudad se trataba de amparar en una norma que antaño tanto había comba-

tido, pero el duque oídos su representante señorial en el territorio y el parecer de algunos abogados, no aceptó la posición de las autoridades locales y les obligó a que diesen posesión a quien había nombrado [\(nota 44\)](#).

Aquello era un nuevo eslabón en la ya larga cadena de enfrentamientos. En 1656 la ciudad da una nueva muestra de su rebeldía y no acepta la designación del Jurado Mayor, así como también se opone a ciertos oficiales solicitando al duque que los cambie, lo que este no acepta [\(nota 45\)](#). Pero las cosas aún serían más graves cuando Segorbe se niega a dar la posesión al heredero del duque en 1657.

La muerte en 1651 de la duquesa de Lerma, esposa del duque de Segorbe don Luis Ramón Folch de Cardona, dejaba como heredero de ambas casas a un niño de pocos meses pues había nacido en 1650. Cumplidos por este los siete años, su padre procedió a una actuación por la cual el que ya era, desde 1651, duque de Lerma tomaría posesión como señor del Estado de Segorbe, si bien lo sería plenamente a la muerte de su padre o cuando éste renunciase. A tal efecto se despacharon los oportunos documentos y cuando los representantes de don Ambrosio de Aragón se dirigen a Segorbe para ejecutar tales actos de posesión señorial, la

ciudad se niega a realizarlos por lo que el duque obliga a la intervención de la Real Audiencia de Valencia [\(nota 46\)](#).

El 24 de julio de 1657 el Virrey de Valencia escribe a la ciudad ordenándole dé posesión del Estado y Ciudad de Segorbe a don Ambrosio de Aragón, pero frente a este mandamiento de la autoridad virreinal el notario Josep de Rocafull como Síndico de Segorbe se opone a cumplirlo con argumentos de poca consistencia, dando origen a un nuevo pleito. Pero Segorbe no iba a estar sola en la nueva causa judicial y el mismo Rocafull, ahora como síndico de un grupo de villas del Brazo Real (Castellón de la Plana, Morella, Jérica, Burriana, Alpuente, Vila-real y La Yesa), solicita sean admitidas las mismas como parte en el proceso:

«en la qual causa tenen notori interés les dites viles per ser com son del Bras Real, y per lo augment y conservació de aquell tocarlos, com los toca, la deffensa dels privilegis que te concedits dita ciutat dels senyor reys, per a no poder ser separada ni desmembrada de la Corona Real, ans be sempre deu estar yncorporada ab aquella». [\(nota 47\)](#)

Nuevamente era la cuestión de retorno a la corona lo que se planteaba como tema de fondo. En octubre de 1657 la Real

Audiencia excluía a las villas del Brazo Real del pleito, al tiempo que permitía la incorporación de particulares de Segorbe como parte en el mismo (nota 48). De nuevo, en febrero y marzo de 1658, la Audiencia volvía a manifestarse confirmando la exclusión de las villas de realengo y clarificando el sentido del pleito como «*causa executiva en virtud de las concordias*» (nota 49). Ante ello la propia ciudad se cuestionaba la continuidad del conflicto y, ante la petición de los oficiales de conseguir dinero para proseguirlo, el Consejo General reunido el 28 de julio de 1658 se niega a aceptar las sugerencias que en tal sentido se le plantean (nota 50).

La Real Audiencia sentenciaba el pleito, en fecha 10 de octubre de 1658, dando la razón a la pretensión del hijo del duque y despachaba ejecutorias a Segorbe para que le diese la posesión, lo que tras la notificación correspondiente a las autoridades de la localidad, se realizaba el 9 de noviembre en un acto donde se dejaba constancia de la protesta de la ciudad y la contraprotesta del representante señorial (nota 51).

En un ambiente tan conflictivo el duque don Luis Ramón quiso dejar bien claro quien tenía el dominio sobre la ciudad, y en julio de 1657 designaba un juez comisionado de residencia, el doctor Claudio Bertina, que en éste caso sí que realizaría la misma (nota 52).

La visita, prolongada al año siguiente de 1658, tendría entre otros resultados la promulgación de un decreto ducal el 30 de octubre, pocos días después de la sentencia y antes de que se ejecutase, con unas ordinaciones complementarias a las de 1619, que a su vez eran reafirmadas expresamente en su vigencia en el primero de los artículos del nuevo texto:

«Se guarden las decretadas por el duque mí señor y antecesor (que aya gloria) en veinte de setiembre del año de mil y seiscientos y diez y nueve, so las penas en ellas contenidas» [\(nota 53\)](#).

Segorbe a la vista del decreto con el texto normativo nuevo, pasada ya la toma de posesión del hijo y heredero, trató de matizarlo presentando un memorial de súplica, en base a una interpretación que sugerían sobre lo ordenado, pero la respuesta ducal, recogida en un nuevo decreto de fecha 24 de diciembre de 1658, si bien aceptó ligeras matizaciones se mantuvo inflexible en lo fundamental [\(nota 54\)](#).

El marco legal quedaba definitivamente fijado en una posición de predominio del duque sobre la ciudad, lo cual sólo podía mantenerse a través no solamente de sus representantes en el territorio, sino en la existencia de una legislación que favoreciese la creación de adictos recompensados con su inclu-

sión en la élite municipal, y para reforzar la misma se disponían formas de control como los apartados 35 y 36 de las nuevas ordinaciones:

«Por quanto se hacen atentados en los consejos assí generales como particulares, y no es fácil aberiguar los que los cometen por decir en ellos el escrivano que la mayor parte de los votos lo determinó, de que resulta padezer dolo los de buena yntención y celosos del bien común entre los que atienden a lo contrario; el Escrivano de la Sala continue con distinción e individuación las personas que fueren de un sentir y las que fueren de otro, pena de diez libras por cada vez que lo dejare de haçer.-

Porque para el gobierno de las ciudades, villas y lugares fueron puestos los consejos particulares y generales, y trastear, deliberar y resolver lo más conveniente al útil de sus vecinos por haver entendido que personas con malignidad de ánimo y fines nosçivos previerten el orden y deliberan juntándose aparte malipulosamente lo que juntos en Consejo no se atrevieran a proponer, y después a fuerça de negociación y con verdad pariada reduçen a los oficiales y consejeros del Consejo particular y general, para que aprueben lo resuel-

*to por ellos; se prohíbe que en ningún Consejo particular y general se apruebe ni confirme lo deliberado por particulares sin preçeder deliberación consiliar propu-
niéndole el Jurado Mayor, a quien toca por leyes y fue-
ros del reyno, y lo que resolviere la mayor parte será
válido y lo contrario nulo y asentado»* (nota 55).

En 1659 la ciudad volvía a sufrir un nuevo fracaso judicial en su intento de proseguir los pleitos contra el duque, al negarle la Real Audiencia de Valencia la posibilidad de cargarse 6.000 libras a censo o imponer sisas con esta finalidad (nota 56). No obstante, sería en 1664 cuando una sentencia del Consejo Supremo de Aragon, resolviendo una causa iniciada en 1661, volvía nuevamente a manifestar la vigencia de la concordia que en 1619 se firmó entre la ciudad y el duque (nota 57).

Se cerraba así, en un lenguaje ambivalente pero de indudable sentido, el modelo de actuación y finalidad fijado en el inicio de un proceso histórico que avanzaba dando como resultado unas normas y acuerdos que, como bien dijera en su día el procurador de la ciudad de Segorbe, si bien era refiriéndose en concreto al ejemplo del texto contenido en las ordina-
ciones de 1619 para los oficios municipales, se habían hecho
«todas ellas a provecho y gusto del dicho duque, y contra la
dicha ciudad» (nota 58).

- 1 ARCHIVO DUCAL DE MEDINACELI (en adelante ADM): Segorbe. Legajo 79/362.
- 2 ADM: Segorbe. Legajo 82/15.
- 3 El señorío de Segorbe fue elevado a ducado en 1475, por concesión del rey don Fernando al infante don Enrique *el segundo*, también conocido con el nombre de «Infante Fortuna». SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.: *Documentación de la Casa de Medinaceli: El Archivo General de los Duques de Segorbe y Cardona*. Madrid, 1990, p. 40.
- 4 El rey don Fernando lo hacía en 1491 y 1503. ADM: Segorbe. Legajos 82/35 y 82/36, respectivamente.
- 5 El mayorazgo se estableció en los capítulos matrimoniales de don Alonso, hijo y heredero del duque de Segorbe, y doña Juana, hija y heredera del duque de Cardona, firmados el 30 de abril de 1516. ADM: Segorbe. Legajo 106/2720.
- 6 ADM: Segorbe. Legajo 88/809.
- 7 ADM: Segorbe. Legajo 87/804.

- 8 ADM: Segorbe. Legajo 90/1062.
- 9 ADM: Segorbe. Legajos 89/934-935 y 89/936-939.
- 10 ADM: Segorbe. Legajo 90/979.
- 11 ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (en adelante: ARV): Real Audiencia (en adelante: RA), Procesos de Madrid, letra S, exp. 327. Es significativo el que la ciudad de Segorbe se refiriese en sus pleitos con el duque siempre nombrándolo como duque de Cardona.
- 12 ARV: RA. Procesos de Madrid, letra D, exp. 107.
- 13 ADM: Segorbe. Legajo 89/947.
- 14 ADM: Segorbe. Legajo 90/1111-1116.
- 15 ADM: Segorbe. Legajo 85/519.
- 16 ADM: Segorbe. Legajo 90/1117-1126.
- 17 ADM: Segorbe. Legajo 91/1151-1155.
- 18 ADM: Segorbe. Legajo 93/2144.
- 19 ADM: Segorbe. Legajos 90/1127-1131, 93/2142 y 93/2143.
- 20 ADM: Segorbe. Legajo 90/1127-1131.
- 21 Una era la que se menciona de las ordinaciones y la otra el sistema a utilizar cuando se produjese un enfrentamiento de posiciones entre la ciudad y el duque.
- 22 ADM: Segorbe. Legajo 90/1127-1131.
- 23 ADM: Segorbe. Legajo 90/1127-1131.

Notas

- 24 *Ordinaciones y estatutos hechas por la ciudad de Segorbe, para las elecciones de Oficios de la dicha Ciudad. Decretadas y aprobadas por el Excelentísimo señor don Enrrique Ramón Folch de Cardona y Aragón, duque de Segorbe y de Cardona. En 20 de Septiembre 1619. Impreso. ADM: Segorbe. Legajo 90/1140, p. 15v.*
- 25 ADM: Segorbe. Legajo 90/1140, pp. 26-26v.
- 26 ADM: Segorbe. Legajo 91/1141-1150.
- 27 ADM: Segorbe. Legajo 90/1127-1131.
- 28 ADM: Segorbe. Legajo 97/2301.
- 29 ADM: Segorbe. Legajo 102/2619.
- 30 ADM: Segorbe. Legajo 97/2301.
- 31 ARV: RA. Procesos de Madrid, letra S, exp. 379, f. 81.
- 32 ARV: RA. Procesos de Madrid, letra S, exp. 379, ff. 85-85v.
- 33 ADM: Segorbe. Legajo 97/2305.
- 34 ADM: Segorbe. Legajo 97/2305. Valencia, 2 de septiembre de 1626.
- 35 ADM. Segorbe. Legajos 94/2155 y 97/2305.
- 36 ADM: Segorbe. Legajo 94/2155. Valencia a 16 de marzo de 1627.
- 37 ARV: RA. Procesos de Madrid, letra S, exp. 379.

- 38 ADM: Varios del Reino de Valencia (en adelante: VRV). Legajo 57/9.
- 39 ADM.: Segorbe. Legajo 109/2758. *Por el duque de Segorbe y Cardona contra la ciudad de Segorbe*. Impreso.
- 40 ADM: Segorbe. Legajo 94/2154.
- 41 ADM: VRV. Legajo 57/9.
- 42 ARV: RA. Procesos de Madrid, letra D, exp. 129; letra D, exp. 132 y letra S, exp. 406.
- 43 ADM: VRV. Legajo 57/9.
- 44 ADM: Segorbe. Legajo 107/2741 y ADM: VRV. Legajo 57/9.
- 45 ADM: VRV. Legajo 57/9.
- 46 ADM: Segorbe. Legajo 108/2742.
- 47 ADM: Segorbe. Legajo 108/2742, f. 28.
- 48 ADM: Segorbe. Legajo 108/2743.
- 49 ADM: Segorbe. Legajo 108/2744.
- 50 ADM: Segorbe. Legajo 108/2745.
- 51 ADM: Segorbe. Legajo 108/2742. La sentencia en ff. 469-472 y la toma de posesión en f. 502v y ss.
- 52 ADM: VRV. Legajo 57/9.
- 53 ADM: VRV. Legajo 57/9, f. 226v.
- 54 ADM: VRV. Legajo 57/9, ff. 233-236.

Notas

55 ADM: VRV. Legajo 57/9, ff. 231-231v.

56 ADM: Segorbe. Legajo 108/2746.

57 ADM: Segorbe. Legajo 108/2747.

58 Juan López, síndico de Segorbe en el pleito ante el Consejo Supremo de Aragón, sobre la nulidad y rescisión de las ordenaciones. Madrid, 12 de mayo de 1627. ARV: RA. Procesos de Madrid, letra S, exp. 379.